

# Cuba: La agonía de un totalitarismo<sup>1</sup>

Antonio Elorza

1. ALGUNAS DE LAS MÁS LÚCIDAS PROSPECCIONES ACERCA DEL futuro político de Cuba tienden a construir los posibles escenarios a partir de las combinaciones previsibles de comportamiento de los actores, dejando en segundo plano el contexto político, económico y social. Tal es el caso de Josep M. Colomer en su ensayo «Después de Fidel, ¿qué?», publicado hace algún tiempo en *Encuentro* (N° 8-9): «Mi hipótesis básica es que los cambios constitucionales suelen depender más de las decisiones estratégicas de los actores, según su fuerza relativa y sus expectativas de futuro, que de experiencias históricas anteriores del país, el ambiente constitucional internacional, la modernización económica y social o cualquier otro factor 'estructural' previamente establecido».

Josep M. Colomer se apoya para su propuesta en el modelo español de transición a la democracia desde arriba, el cual vendría a nuestro juicio a probar justamente lo contrario. La centralidad del juego de los actores para el análisis, en función de sus recursos disponibles y de sus expectativas, es algo que nadie discute. No obstante, conviene tomar en consideración que esos actores se han configurado en el curso de un proceso histórico, reciben del mismo tanto los recursos disponibles para la acción como los factores condicionantes y, por último, otro tanto cabe decir de sus expectativas y los eventuales riesgos que recaen sobre la materialización de las mismas.

Un ejemplo: en la transición española, el comportamiento del protagonista principal, el rey Juan Carlos I, estuvo condicionado por factores perfectamente identificables en el régimen anterior. De entrada, tuvo que jurar los Principios del Movimiento solemnemente ante el general

---

<sup>1</sup> Ponencia presentada en el seminario «Cuba ante el siglo XXI», organizado por la Universidad de Georgetown y celebrado en Puerto Rico, el 3 de abril de 2003.

Franco en 1969 como condición inexcusable para convertirse en sucesor suyo. Conocía al mismo tiempo, por la experiencia catastrófica de su cuñado Constantino de Grecia, y por el trato vigilante, cargado de desconfianza que recibía, los escasos alicientes que acompañaban a una eventual aceptación por su parte del papel de rey-títere en manos de franquistas y militares. El contexto internacional también intervino en el mismo sentido. Acababan de caer las dictaduras de Portugal y de Grecia, con lo cual España quedaba aislada en una Europa democrática, y la fuerza política norteamericana aliada tradicionalmente con el franquismo, el Partido Republicano de Nixon, se encontraba sumido en una crisis que pronto hizo posible la presidencia de Jimmy Carter. De este modo, aun cuando jugara un papel no desdeñable, la posición asumida por Juan Carlos, basada en un rechazo profundo de la política dictatorial de su predecesor, y del papel que le era asignado en la misma, las cartas para su juego le fueron repartidas desde ese marco político, tanto exterior como interno, que hemos mencionado. Consecuentemente, cabe admitir, a la hora de determinar las líneas de actuación de éste como de otros actores principales en la transición española, que cuentan decisivamente los aludidos factores «estructurales», entre los cuales, *last but not least*, hay que resaltar la ausencia de recambio para cualquier forma de continuismo franquista.

Este último resulta esencial para entender la forma que asumió la transición española. El escenario continuista tenía dos puntos débiles. El primero, evidente, que Franco, lo mismo que Fidel, era mortal; su único defecto político, en opinión de su más próximo colaborador, Carrero Blanco. El segundo, la naturaleza del régimen que presidía, y que según veremos, poco tiene que ver con la caracterización clásica de Juan J. Linz en cuanto «régimen autoritario». Como bien advierte Linz, el régimen autoritario implica la existencia de un pluralismo limitado, el cual, en los casos del PRI mexicano o del nasserismo egipcio, proporciona los recursos para su autorreproducción por encima de la muerte o el cese del titular del poder. Por su parte, Franco centró su voluntad punitiva sobre la oposición democrática, incluidos socialistas y comunistas, pero tampoco permitió la organización de los sectores más dinámicos de su régimen, los cuales desde los años 60 habían percibido la exigencia de poner en pie un orden autoritario capaz de garantizar la persistencia de sus posiciones de poder más allá de la muerte del dictador. A pesar de ello, con la llegada a la presidencia del gobierno del almirante Carrero Blanco, pareció consolidarse una hábil estrategia continuista, cuya pieza clave consistía en asignar la jefatura nominal del Estado a Juan Carlos, quien resultaría «quemado» al encabezar simbólicamente tanto las instituciones del franquismo como la inevitable fase de represión que hubiera seguido a la muerte del dictador para mantenerlas. Claro que una vez asesinado Carrero, esa perspectiva cayó por tierra, fragmentándose ante el consiguiente vacío las estrategias de los grupos y de las personalidades franquistas, generándose un poblado haz de estrategias de supervivencia política individual, lo cual acabaría constituyendo un recurso importante en manos de Juan Carlos para dismantelar el régimen desde su propio interior.

Así y todo, no fue fácil vencer en 1976 el obstáculo institucional que Franco había dispuesto frente a cualquier veleidad democrática del príncipe: el Consejo del Reino, al cual correspondía presentar al jefe del Estado la terna de posibles presidentes del gobierno. Por otra parte, el modelo proyectado por Colomer desde España sobre Cuba, apuntando a la reforma por medios legales desde el propio «régimen autoritario» ignora un hecho esencial: en Cuba no existe la variable independiente que representó en España la actuación de Juan Carlos, determinada por el complejo de causas a que antes hicimos referencia. Además, podríamos añadir con humor negro, ETA no ha volado el automóvil de Raúl.

Dentro de esas características específicas del franquismo, que paradójicamente contribuyeron a su fin, tampoco cabe olvidar el lugar del Ejército, «columna vertebral del régimen» por un lado, y por otro convenientemente fraccionado en su organización por el propio Franco de manera que nunca pudiese definir una estrategia autónoma frente a su jefatura. La historia cuenta aquí y mucho: Franco tuvo siempre a la vista lo sucedido con el dictador de los años 20, general Primo de Rivera, sometido al poder de sus generales y finalmente expulsado por ellos. La pluralidad orgánica, y por consiguiente, de centros de decisión en las fuerzas armadas, sometida al mando supremo de Franco, fue heredada por Juan Carlos como rey, y jugó un papel decisivo, primero para impedir la designación de un interlocutor legitimado para manifestar al monarca la oposición a la reforma democrática, en particular a la legalización del partido comunista y a la concesión de las autonomías, y segundo, a la hora de bloquear la convergencia efectiva de las distintas líneas golpistas que intervienen en el 23-F.

Los datos estructurales de la economía española, tal y como ésta se configura desde los años 60, desempeñaron asimismo un papel muy favorable al cambio. El miedo a la lucha de clases, heredado de la guerra civil, había cedido paso entre los capitalistas españoles a una conciencia muy clara de que su prosperidad estaba ligada a la economía europea, y a la impresión bien fundada de que sólo mediante la democracia ese vínculo podía traducirse en una adhesión efectiva. Ningún sector de la economía española era ajeno a ese proceso de integración. Desde 1960, los trabajadores habían experimentado una verdadera revolución en sus ingresos, participación en el PIB y formas de vida, lo cual sirvió de base al hecho de que la fuerza política más importante de la izquierda, el PCE, y con él Comisiones Obreras, olvidasen el lenguaje revolucionario para convertirse en factor decisivo de estabilidad económica y política en la transición. A su vez, los grupos económicos de mayores peso y dinamismo miraban el futuro de manera optimista y estaban en condiciones, a pesar de su escaso gusto por la democracia, de propiciar el imprescindible consenso.

Por añadidura, el recuerdo de la guerra civil no actuaba ya, a cuarenta años de distancia, como acicate para generar tensiones y odios, sino como espectro benéfico, en la medida que interpelaba a todos los españoles para que en ningún caso 1936 volviera a producirse. En los años 70, Franco era el

emblema de un mundo que agonizaba y su régimen, en particular el partido único, carecía de toda presencia social más allá de la represión.

Por fin, la europeización y/o americanización de las elites ligadas al desarrollo, reflejada en un amplio repertorio de manifestaciones culturales, culminaba un estado de la cuestión bien definido: las precondiciones del pluralismo político y de la democracia estaban dadas antes de que el cambio institucional tuviera lugar. Las estrategias de los actores en el proceso de transición no fueron irrelevantes, acertando al seguir la vía de reforma desde arriba, la más favorable para el actor principal (el rey), que reducía al máximo los costes en conflictividad y los riesgos de involución. Pero fueron, fundamentalmente, estrategias de adecuación a ese complejo de condiciones favorables previamente establecido.

La conclusión de la lectura del «modelo español» es que intervienen como factores positivos de cara a la transición: A] la naturaleza del régimen, un cesarismo que vincula su supervivencia a la persona del dictador, y que bloquea la organización de los grupos sociales y políticos que, procedentes de la misma dictadura, hubieran buscado una salida continuista; B] la fragmentación orgánica y en cuanto a intereses de los sectores políticos y militares que habían integrado el aparato estatal franquista; C] el resultado de la incidencia de una variable externa, el progreso económico de la Europa comunitaria, que determina, a partir de los lazos establecidos desde los años 60 —mercado, remesas de emigrantes, turismo—, una modernización económica y social del país, antesala de la política.

Como veremos, no faltan analogías entre los casos español y cubano, si bien lo que prevalecen son diferencias, cuando no oposiciones. Es lícito incluso preguntarse si vale la pena plantear la comparación.

**2.** El principal punto de contacto reside en la naturaleza cesarista de ambos regímenes. Vaya por delante que el arsenal de conceptos políticos no es muy nutrido ni preciso, pero conviene elegir los más adecuados para cada caso si a continuación pretendemos establecer hipótesis acerca de su funcionamiento y desarrollo.

Antes de empezar, desechemos para el régimen de Castro el rótulo recientemente acuñado de «sultanismo», por la sencilla razón de que el sultanismo tiene existencia histórica y es una de las formas de dominación política del pasado islámico, permitiendo designar un poder personal autónomo, cuya condición excepcional se deriva de su vínculo con la divinidad —el sultán es «la sombra de Alá»—, pero cuya legitimidad de facto es transmitida por vía dinástica, y no por una designación de carácter religioso, aun cuando esta perviva en el plano simbólico. La tentación sultánica ha sido fuerte en los regímenes totalitarios inspirados en religiones seculares, aflora en dictaduras de países musulmanes tales como Siria o Irak, pero sólo excepcionalmente —caso de Kim Il-Jong en Corea del Norte— ha llegado a consolidarse.

Más frecuente ha sido el recurso a la etiqueta de «autoritarismo», concepto muy útil, pero justamente cuando es evitado su uso a modo de cajón de sastre

en el que son incluidos todos los regímenes situados en la tierra de nadie entre el totalitarismo y la democracia. Juan J. Linz desarrolló una extensa caracterización del franquismo en cuanto régimen autoritario y, entre otros, el citado J. M. Colomer y Marifeli Pérez-Stable han aplicado la calificación al castrismo, añadiendo la segunda que se trata de un «autoritarismo de movilización».

Por lo que toca al castrismo, la inadecuación es patente si aceptamos su encaje como forma peculiar de totalitarismo, tema sobre el que pronto hemos de volver. Y en lo que se refiere a la dictadura de Franco, no resulta difícil probar que tres de las cuatro notas que asigna Linz al régimen autoritario son difícilmente atribuibles al franquismo. «Los regímenes autoritarios son sistemas políticos —define Linz—: A] con un pluralismo político limitado, no responsable; B] sin una ideología elaborada y directora (pero con una mentalidad peculiar); C] carentes de una movilización política intensa o extensa (excepto en algunos puntos de su evolución), y D] en los que un líder (o si acaso un grupo reducido) ejerce el poder dentro de límites formalmente mal definidos pero en realidad bastante predecibles». Añade Linz al último punto que no es necesario un líder carismático. Pues bien, el franquismo descansaba inexcusablemente sobre el Caudillo como líder carismático, que llegado el caso ejercía un poder ilimitado e impredecible (últimos fusilamientos de 1975) y tenía una ideología tan tosca como bien asentada, que tuvo incluso el cuidado de expresar, no sólo en sus discursos, sino en un guión cinematográfico, el de la película *Raza*. Y por encima de todo, las llamadas *familias del régimen*, expresión de su génesis plural y de su orientación arcaizante, fueron fundidas muy pronto en un partido único (1937), sobreviviendo sin capacidad para asumir por sí mismas un papel político significativo, por lo menos en cuanto a capacidad de incidir sobre las decisiones del dictador. Faltó de este modo el pluralismo restringido que en los regímenes realmente autoritarios hace posible su reproducción más allá del período de vigencia de un liderazgo personal.

Con mayores motivos, resulta erróneo calificar de autoritario al régimen de Fidel Castro. La pluralidad de componentes no se traduce nunca en posibilidad de que surjan redes o grupos de interés susceptibles de afectar a las decisiones del líder máximo: Aníbal Escalante y Arnaldo Ochoa pudieron comprobarlo en carne propia. Hay en el castrismo sobrada movilización, un fondo ideológico confuso pero innegable, y el poder de Fidel carece de límites y rara vez es predecible, en el marco de un estado de excepción permanente. Como en el caso de Franco, hablar de «autoritarismo» para Castro sirve sólo para propiciar una caracterización débil de su régimen.

Desde nuestro punto de vista, tanto el régimen de Franco como el de Fidel Castro, son variantes de «cesarismos», esto es, de regímenes de poder personal carismático, no sometido a limitaciones institucionales o implícitas, que suelen obtener tanto su legitimidad como la garantía de pervivencia de su condición de jefes militares en una guerra victoriosa que les llevó al poder (o en su defecto, de un golpe de Estado triunfante). A la personalización del sistema corresponde una tendencia natural a convertir en vitalicia esa magistratura

excepcional, dado que el vencedor se confiere a sí mismo una dimensión soteriológica, en cuanto salvador que pretende haber redimido para siempre a la nación de sus males históricos, y fundador de un nuevo orden pretendidamente metahistórico. Es cierto que por su condición humana el dictador no puede aspirar por sí mismo a esa eternidad; como compensación intentará por todos los medios que la duración de su poder y la de su propia vida coincidan. No existe a este respecto diferencia alguna entre Franco y Castro.

Cesarismo no es pretorianismo, esto es, un régimen en que el ejército detenta corporativamente el monopolio de las decisiones políticas. Precisamente el César, en calidad de caudillo triunfante, se cuida de cortar de cuajo la entrada en escena de un poder compensatorio emanado de sus compañeros de armas: el proceso de Huber Matos en Cuba y el ostracismo a que Franco condenó a todo general disconforme —por no hablar en ambos casos de los accidentes aéreos estratégicos que costaron la vida a Camilo Cienfuegos y al general Mola, respectivamente— son muestras de esa cautela.

No obstante, a partir de su génesis, el cesarismo encuentra un apoyo inevitable en las fuerzas armadas que estuvieron bajo su mando, a las cuales convierte en instrumento fundamental de su dominación. De ahí que para el caso cubano se hablara con frecuencia de «guerrillerismo» y que en España dictadura de Franco y dictadura militar se convirtieran en sinónimos. Primero, el Ejército garantiza el mantenimiento del sistema, tras una dura represión inicial que garantiza en lo sucesivo el aplastamiento de cualquier intento de oposición, no sólo armada o subversiva, sino de movilización de masas. Sometida a un código de comportamiento militar, la seguridad interior aparece como un complemento imprescindible del protagonismo militar. Segundo, el Ejército penetra en la sociedad y sus miembros desempeñan cargos de dirección, asegurando de este modo la lealtad forzosa de los distintos grupos sociales al régimen. Tercero, en el plano simbólico, la legitimación militar del poder se traduce en una obsesiva proliferación de mitos, emblemas, signos y rituales tomados de esa guerra fundadora. La España del 18 de julio alcanza una culminación de esa tendencia en el Valle de los Caídos, si bien el contexto democrático europeo limitará cada vez más la exhibición de semejante parafernalia; cosa que no sucede en la Cuba castrista, donde la población se encuentra sometida a un permanente lavado de cerebro consistente en la repetición imaginaria de las gestas de Sierra Maestra (reforzadas por la sombra de las guerras decimonónicas). «Cuba será un eterno Baraguá», rezaba el cartel de propaganda en los peores momentos del Período Especial, evocando el numantinismo formal de Maceo.

Los caminos a partir de aquí se separan. El Ejército es la espina dorsal de los dos regímenes, se infiltra en ambos en la sociedad, pero en el caso español, una vez fracasado el impulso fascista de la primera posguerra, ciñe sus objetivos a defender con mano de hierro al régimen. Franco era un jefe de cuartel preocupado de que imperase la disciplina y cuadrasen los estadios. Surgió así un espacio para la sociedad civil. En cambio, Fidel aspira desde un primer momento a forjar un nuevo hombre y una nueva sociedad, con más o

menos claridad de ideas, a partir de un populismo radical de los primeros tiempos hasta el igualitarismo de inspiración comunista. Tal y como refleja su película *Raza*, Franco no superaba los límites de un corporativismo militar, justificado por su ideal de «salvar a España»; una vez logrado este objetivo, la defensa del orden y la propiedad, la sociedad podía recuperar su autonomía en el plano económico. La redención protagonizada por Fidel concernía, para desgracia de los cubanos, al conjunto de la sociedad. Cabe pensar que las menciones a Martí o al marxismo-leninismo fueron siempre instrumentales. En la mente de Fidel se encontraba la imagen de la gran hacienda regida por su padre inflexiblemente y bajo un criterio de estricta austeridad. No en vano *Animal Farm* de Orwell está prohibida en Cuba. Su poder personal era la fórmula política del verdadero patriotismo, y lo malo es que sus intenciones y sus propósitos comprendían sin excepción a todos los cubanos y en todas las facetas de la vida. La psicología del dictador incide aquí, tanto para excluir todo compromiso con las estructuras de poder características de los partidos comunistas, como para dar cuenta de su oposición, no sólo al capitalismo, sino por mucho tiempo al simple empleo de categorías económicas en su gestión, salvo en los casos extremos en que tal recurso resulta imprescindible para atender a su objetivo esencial, la supervivencia del régimen (léase de su dictadura). La figura sacralizada del Che, como es sabido, adversario de todo propósito de cálculo estrictamente económico, sirve para reforzar esa deriva irracionalista hacia la abolición de la contabilidad en nombre del mito de la revolución.

Fidel odió siempre la economía y la política, tanto como amó y ama desesperadamente a su propio poder. Las cartas de la Isla de Pinos, recopiladas por Conte Agüero, constituyen un testimonio irrefutable sobre este punto, que si hace falta puede ser completado con sus discursos y declaraciones de 1959-1960. Su forma preferida de poder fue y es una autocracia basada en la demagogia, formalmente esa falsa democracia de la plaza pública cuya práctica inaugura apenas desembarcado en La Habana, en el sentido de que el demagogo declara cumplir las instrucciones emanadas directamente de las masas a las que manipula. Los grandes discursos de enero de 1959 definen un estilo de ejercicio del poder, vigente hasta hoy, bajo el cual se esconden una represión inexorable del oponente y una exigencia de encuadramiento de la sociedad para que las masas se atengan de modo estricto a las consignas del líder. Para alcanzar ambos fines será condición necesaria pero no suficiente desde muy pronto, la inclusión en el sistema de poder de un partido comunista, cuyos métodos políticos y vocación hegemónica Fidel rechaza, pero al que se ve obligado a acudir en ausencia de otra fuerza organizada dispuesta a aceptar su instrumentalización. El PSP proporciona los recursos humanos y orgánicos para someter la sociedad cubana posrevolucionaria a una eficiente camisa de fuerza, y además, desde 1961 el comunismo se convierte en seña de identidad de la revolución y en apoyo externo imprescindible con la asistencia de la URSS. A lo que no está dispuesto Castro es a contemplar pasivamente cómo el PC cubano constituya, no ya un poder alternativo al suyo, sino una organización autónoma con iniciativas propias. Así que Fidel Castro presidirá una

revolución comunista, con el aparato del partido en una función indispensable de gestión burocrática, control de la sociedad y adoctrinamiento político, sin que el PCC constituya nunca el centro de decisiones. La subordinación se acentúa incluso desde que en los años 90 la dependencia económica de la URSS cede paso a una forzosa autonomía, ya esbozada desde 1986.

El cesarismo de Fidel representa la clave de bóveda de un peculiar totalitarismo, que tal vez sugiere el empleo de la categoría de «totalismo», a la vista de la importancia que en el mismo adquieren las dinámicas de movilización y control a partir de la base social. Tomemos como punto de referencia la definición de totalitarismo que propone Emilio Gentile. En síntesis, para hablar de totalitarismo hacen falta las siguientes notas: A] un movimiento político organizado por un partido rígidamente disciplinado; B] que aspira al monopolio del poder y que una vez conquistado destruye o transforma el régimen preexistente y construye un Estado nuevo fundado sobre un partido único; C] con el objeto de subordinar e integrar a la sociedad sobre la base de la politización integral de la existencia; D] interpretada de acuerdo con una ideología sacralizada en forma de una religión política cuyo último fin es la creación de un hombre nuevo que asume plenamente los valores del orden totalitario. Es claro que las tres últimas encajan plenamente con los rasgos propios del castrismo, pero no la primera, ya que los analistas coinciden en subrayar el papel de instrumento, y no de protagonista, que desempeñó el PSP, luego Partido Comunista de Cuba. A Fidel Castro le fue indispensable el PSP, por su experiencia y sus métodos, para configurar el régimen, y en particular el aparato de seguridad. No obstante, al mismo tiempo fue siempre consciente del riesgo que entrañaba la cohesión interna de la organización comunista y por eso cortó de cuajo toda pretensión hegemónica de la misma, a partir de la excomunión de Escalante. Ni siquiera cuando más tarde la ayuda soviética se hizo imprescindible, mostró la menor tolerancia ante los intentos de recuperación ortodoxa de quienes fueron inmediatamente condenados como «microfracción». En los años 70 y 80, la soviétización progresiva del sistema y la utilización del ejército en empresas exteriores hicieron del PCC la clave institucional del régimen (primer Congreso en 1975, Constitución de 1976). No obstante, con el colapso de la ayuda soviética a partir de 1990 y las reformas constitucionales de 1992, el Ejército recupera la primacía en la pirámide del poder, quedando para el PCC la función de control de la gestión pública ordinaria y de la seguridad, sin una posición relevante en el proceso de adopción de decisiones.

El acotamiento del espacio político del partido tiene lugar asimismo por la base, lo cual confiere al castrismo la mencionada dimensión «totalista», al pasar a primer plano el objetivo de la movilización popular. Cuando Fidel habla, «pueblo» se refiere a la comunidad de los creyentes en la revolución, verdadero complemento de la dirección política ejercida por el líder carismático. Es lo que ya esboza la «democracia de plaza pública» practicada por Fidel desde sus primeras semanas en el poder. De ahí los cometidos de movilización, que requieren una intensa entrada en juego de la ideología, y de vigilancia para impedir, no sólo todo intento contrarrevolucionario, sino los



menores brotes de pluralismo político. A lo largo de la historia del castrismo, los órganos del poder popular y los comités de defensa de la revolución encarnan el sesgo totalista de la revolución, tendente a consolidarla por medio de un amplio consenso popular, intensamente asumido, y a hacer de todo cubano un hombre nuevo capaz de asumir sin reservas la religión política de la revolución.

El permanente bombardeo de los medios de comunicación social, se dirige a lograr ese propósito. Los contenidos ideológicos del proyecto se inscriben en el marco de un estricto maniqueísmo, empezando por la exigencia de pureza revolucionaria, con la escala de oposiciones bipolares revolucionario vs. contrarrevolucionario o *gusano*, comunista vs. burgués, patriota vs. imperialista/ norteamericano. Todo lo referente a la revolución, casi siempre con una densidad teórica mínima, integra una doctrina sagrada, y sobre todo, un repertorio de símbolos sacralizados. Esta historia sagrada de la revolución, encarnada en una serie de personajes, despunta con Martí y los héroes de la independencia, Maceo al frente, cobra forma definitiva con los mártires durante la epopeya guerrillera, a partir del asalto al Moncada, y culmina en la figura del Che, el Gran Redentor. Todos los cubanos son invitados desde su primera infancia y día a día a comulgar con tales símbolos y referencias míticas, integradoras de una auténtica religión política cuyos últimos componentes ideológicos, conviene destacarlo, son de naturaleza nacionalista y no clasista. No cabe olvidar las raíces populistas del castrismo. Tal manipulación mística de los símbolos del poder tiene como punto de llegada la profesión de fe en la excepcionalidad de la figura de Fidel. En la vertiente opuesta, los enemigos de la revolución, o simplemente quienes no asumen la *religatio* revolucionaria en su plenitud, han de ser castigados con toda severidad, y en el caso de proceder del interior del sistema, al modo soviético, el castigo debe ir acompañado de la autocrítica. No hay espacio alguno para la neutralidad o para la disidencia. Al otro se le niega toda existencia, en el mejor de los casos pasa a ser un muerto civil, en tanto que el poder monopoliza sin reservas el espacio público y la comunicación social. Según el código de comportamiento castrista, el consenso ha de ser activo y basarse en la ejemplaridad y en un doble proceso de deshumanización, tanto por lo que concierne al comportamiento biomecánico del pueblo revolucionario en obediencia a Fidel, como al disconforme privado del reconocimiento de sus derechos. Las apariencias gozosas de la sociedad cubana son la máscara de un orden totalitario de vocación omnipresente, susceptible de abarcar todas las facetas de la vida.

Este consenso fue hasta el Período Especial uno de los factores que dieron solidez al régimen. Los disconformes sólo tuvieron la opción del exilio interior o de la emigración a los Estados Unidos, de acuerdo con la aplicación del principio de Arquímedes enunciado por el Che ante Nasser, en el sentido de que la profundidad de una revolución se mide por el volumen de las expulsiones de contrarrevolucionarios. Sólo que al desplomarse —con el fin de la ayuda soviética— la ficción de una sociedad justa y autosuficiente, y conseguir Fidel la supervivencia del régimen únicamente a partir de la dualidad de

situaciones que produjo la dolarización, ese consenso en gran parte quebró y el castrismo no puede confiar en que su supervivencia sea conseguida por un apoyo de masas. Esta es una de las claves de una eventual transición. Para muchos cubanos el espejismo de la disneylandia revolucionaria se ha disipado y únicamente la conciencia generalizada de que el régimen (léase Fidel) está dispuesto a encarcelar y a matar si es preciso con tal de perpetuarse, constituye una garantía de obediencia.

En resumen, la condición de régimen cesarista liga la supervivencia del castrismo, en lo esencial, a la supervivencia biológica de Fidel Castro, por lo cual resulta evidente que su muerte supondrá un momento crítico, superado previsiblemente a corto plazo por el ejercicio de un poder continuista ejercido por su hermano Raúl, con el Ejército como centro de poder y el PCC en calidad de instrumento de control y de represión. El componente totalista no se encuentra en condiciones de proporcionar la movilización unánime de las masas que en su día constituyó la seña de identidad del castrismo, si bien tampoco cabe menospreciar la infiltración en la sociedad que todavía proporcionan las organizaciones de masas para contener, vigilar y denunciar, ni la del sistema represivo para aniquilar toda oposición, cueste lo que cueste. Y está, en fin, la penuria en los abastecimientos y la expectativa para muchos cubanos de poder vivir tal y como lo hacen aquellos que poseen dólares. A través del miedo de dominantes y dominados, un proyecto continuista logrará prolongar su vigencia; no conseguirá el consenso y ello le colocará siempre en una situación de fragilidad.

**3.** Las interpretaciones más rigurosas de la evolución del régimen durante los años 90, al colapsar el comunismo subsidiado por la URSS, insisten en que Cuba se encuentra en una fase posttotalitaria, ya que aflora un cierto pluralismo en la sociedad civil, el molde comunista tradicional hace aguas y despuntan posibilidades de nuevos métodos de gestión económica. Por nuestra parte, preferiríamos hablar de totalitarismo o de totalismo en quiebra, o de post-sovietismo, porque efectivamente, el régimen ha reconocido el fracaso de los modos de gestión de tipo soviético, vinculado al fin de las subvenciones, abre debates internos sobre economía entre sus especialistas, transforma el papel del Ejército confiriendo una función dirigente a los gestores militares y se ve obligado para sobrevivir a dar marcha atrás en su tradicional economía de guerra, recuperando la pequeña NEP del mercado libre campesino y de un enjambre de pequeñas unidades económicas a la sombra del dólar.

Ahora bien, no hay que confundir los debates internos de los tecnócratas del régimen con una actitud de fondo, propia de Castro, que acepta las reformas por simple pragmatismo, en aras de la mencionada supervivencia, y abraza siempre el firme propósito de restaurar en cuanto sea posible su ideal de destrucción de todo tipo de relaciones mercantiles. Otra cosa es que sea consciente de la imposibilidad de ese retroceso si quiere salvaguardar su sistema de poder, objetivo siempre prioritario para él. Eso no impide que en modo alguno pueda considerarse la moral de adecuación propia de Fidel como un

signo de apertura hacia la modernización del país. Y como acaba de verse, en el plano del pluralismo y de la tolerancia hacia una naciente oposición, apenas la atención transitoria hacia un contexto internacional poco favorable impidió el regreso a la tradicional búsqueda de la uniformidad política por medio de una represión recuperada en cuanto la crisis de Irak lo ha hecho posible. La oleada de detenciones y condenas vivida la pasada primavera, constituye por desgracia la mejor prueba de que ni el posttotalitarismo ni el poscastrismo han empezado todavía.

Los posibles escenarios de la transición se ven de este modo drásticamente reducidos. La eliminación de las incipientes movilizaciones de la sociedad civil, la supresión del pluralismo y el aplastamiento de la reforma encarnada por el Proyecto Varela, son otras tantas muestras de que no cabe esperar la puesta en práctica de aquello que las minorías activas de la democracia cubana intentaron desde mediados de la pasada década, es decir, una transición pactada a la española, sobre la base de una reconciliación nacional. En el «modelo español», los opositores estuvieron dispuestos a renunciar a toda pretensión de venganza, a cambio de que los sectores más abiertos del régimen se conformaran con ejercer un poder transitorio, orientado en lo esencial al establecimiento del pluralismo democrático. Desde las iniciativas del Concilio cubano en 1995, la primera de las condiciones fue sobradamente cumplida, sin que ello modificara lo más mínimo las posiciones del convocado por ellos para encabezar la transición, el propio Fidel Castro. La puesta en marcha del Proyecto Varela ha constituido un segundo intento en la misma dirección, con el aliciente de buscar acomodo para la reforma en el marco de las disposiciones constitucionales vigentes. El resultado está a la vista: para Castro, todo aquel que promueva la democratización del sistema es un agente al servicio de los Estados Unidos, y como tal debe ser castigado.

En consecuencia, es puro bizantinismo discutir sobre si la escalada represiva de abril representa una prueba de debilidad o de fortaleza del régimen. Más bien tiene el aspecto de una reacción agónica, pero su fondo es el mismo que guió las respuestas violentas de Fidel a cualquier crítica o reivindicación de pluralismo desde los inicios de la revolución. Lo que cuenta es, en primer plano, la confirmación de que la esencia totalitaria del castrismo, aun resquebrajada, sigue en pie, dispuesta a practicar una violación sistemática de los derechos humanos en la medida en que lo estime necesario para preservar su permanencia. «Esto no hay quien lo tumbé y tampoco quien lo cambie»: el dicho popular se ha convertido en lema del sistema político castrista. Pasa así a carecer de validez cualquier especulación acerca del futuro político que incluya la posibilidad de mutaciones en vida de Fidel. La reconciliación puede ser una consigna válida para el posfidelismo; de momento es hora de restaurar en lo posible la disidencia democrática, dentro de la Isla, y la oposición en el exterior. Insistir en la perspectiva de cambios posibles bajo Fidel o en reconciliación nacional para el presente, equivale a proponer un desarme completo de unas minorías activas democráticas ya suficientemente golpeadas desde el régimen. Otro tanto sucede con los planteamientos elaborados a partir de la

equidistancia entre la dictadura y la política norteamericana, censurando a ambas por igual. Esta es un factor del contexto, posiblemente negativo, pero el adversario es uno, la dictadura de Fidel, y hacerla compartir con otro la responsabilidad política es tanto como proporcionarle una innecesaria circunstancia atenuante. El dato esencial es el cerrojo dado en abril a la perspectiva de un inicio de la transición aquí y ahora. El abanico de posibilidades de cara al futuro se ha reducido drásticamente.

Tampoco puede ser viable un continuismo puro y duro, en ausencia de Fidel. Incluso por razones de edad, Raúl está sólo en condiciones de ejercer un poder transitorio, apoyado en instituciones y fuerzas previamente consolidadas, si bien su única baza de supervivencia consiste en lograr que sean estas fuerzas —el Ejército ante todo— las que le asuman por representante supremo. El cesarismo sería sustituido paulatinamente por un pretorianismo tecnocrático, sustentado sobre el control de la población que bajo una u otra etiqueta seguiría ejerciendo el aparato comunista. Con eso no queremos menospreciar, todo lo contrario, el papel que puede desempeñar Raúl de cara a un cambio dentro de la continuidad. Sólo subrayamos algo obvio, que Raúl no es Fidel, y es casi tan viejo como Fidel.

El principal inconveniente para tal escenario continuista reside en la ineficacia mostrada hasta ahora por la tecnocracia militar para conseguir que la mayoría de la población llegue a alcanzar unos niveles satisfactorios de atención a sus necesidades materiales. Nos encontramos lejos del caso español, donde el progreso económico favorecía el rechazo en una dictadura nada eficiente e incompatible con la inserción en Europa, aun cuándo por la vía opuesta, el resultado puede ser similar. Una vez desaparecido el líder máximo y supremo verdugo, resulta verosímil que una alta proporción de habitantes de las ciudades rechace de plano todo intento de prolongar la vida de un régimen que sólo les garantiza una aguda penuria, atendida eso sí por una plétora de médicos y por un enjambre de *segurosos* dispuestos a seguir practicando la eliminación sistemática de toda disidencia. No es fácil que los sucesores de Fidel puedan atemorizar, encarcelar y disparar con la misma facilidad que él lo viene haciendo.

El escenario más probable a corto plazo es, pues, un ensayo de supervivencia dirigido por el complejo Ejército dominante-PCC instrumental, con Raúl, tal vez inspirado en el modelo chino, que en el mejor de los casos verá alterados sus equilibrios por una u otra forma de acción insurreccional de la población urbana. De esa encrucijada pudiera derivarse un segundo escenario, el cual, en circunstancias óptimas consistiría en un diálogo entre las elites modernizadoras procedentes del castrismo y una oposición interior que desde hace tiempo ha aprendido las virtudes de la paciencia y de la moderación. Las restantes posibilidades abrirían el camino hacia una u otra variante de infierno político.